

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, diciembre doce (12) de dos mil veintitrés 2023

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05360 31 05 002 2017 00387 01 promovido por la señora **NORA ELENA ÁNGEL MESA**, en contra de **INVERSIONES EN SALUD S.A.S. y E.P.S. y MEDICINA PREPAGADA** y en el que fue vinculada como tercero interviniente a **COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver la apelación interpuesta por los apoderados de las partes frente a la sentencia emitida el 14 de marzo de 2019 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia número **399**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Nora Elena Ángel Mesa interpone demanda laboral en contra de Inversiones en Salud S.A.S. y EPS Medicina Prepagada Suramericana S.A., con el fin se declare la existencia de múltiples y sucesivos contratos de trabajo con las demandadas, desde el 9 de mayo de 1999, que fue interrumpido por la renuncia inducida de la que fue víctima el 29 de marzo de 2015, momento en el que suscribió un nuevo contrato de trabajo a término indefinido, sin que le fuera reconocido el tiempo de servicio anterior. Que como consecuencia de esto se deje sin efecto el contrato de trabajo suscrito el 1 de abril de 2015 y se ordene el reintegro de la actora al mismo cargo que venía desempeñando junto con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social por todo el tiempo laborado, así como las cesantías, intereses a

las cesantías dobladas, prima de servicios, indemnización por falta de consignación de cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; indemnización por falta de pago del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y las consecuencias derivadas de no haber aportado el comprobante del estado de sus cotizaciones al Sistema a la terminación del contrato de trabajo.

Para sustentar sus pretensiones, afirma que se vinculó al servicio de las demandadas desde el 9 de mayo de 1999 al 31 de mayo de 2017, inicialmente bajo un contrato de prestación de servicios que tuvo vigencia hasta el 8 de mayo de 2000 y se fue prorrogando sucesivamente en el tiempo y luego, por un contrato de trabajo a término indefinido que suscribió el 1 de abril de 2015 y que se mantuvo hasta el 17 de mayo de 2017, fecha en la cual la actora renunció voluntariamente a su cargo, haciéndola efectiva para final de mes. Manifiesta que al momento en que se dio el cambio en la modalidad de vinculación se le hizo firmar un documento según el cual renunciaba a cualquier reclamación respecto de los contratos de prestación de servicios suscritos anteriormente con las demandadas y, no se hizo una liquidación definitiva de las prestaciones sociales que había causado con la prestación del servicio continuo y habitual, por tantos años. Manifiesta que laboró como médica general, por lo que realizó consultas de rutina, control de riesgo cardiovascular, crecimiento y desarrollo, a los pacientes designados por las demandadas, dentro de las instalaciones y en el horario dispuesto por éstas. Que, durante el período comprendido entre el 9 de mayo de 1999 hasta el 1 de abril de 2015, no fue afiliada al Sistema General de Seguridad Social ni a un Fondo de Cesantías o Caja de Compensación Familiar, ni le reconocieron los elementos propios de la relación laboral, y que al momento de suscribir el contrato de trabajo fue afiliada al sistema, pero realizaron las cotizaciones en un monto por debajo del salario que realmente devengaba.

Una vez admitida la demanda, se procedió con la notificación a las demandadas e interviniente, las cuales presentaron contestación en los siguientes términos:

Colpensiones manifiesta no constarle los hechos expuestos por ser ajenos a su representada, adhiriéndose a la pretensión relativa al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social durante la vigencia de la relación laboral, conforme sea demostrado en el proceso. Formula como excepciones de mérito las de “Inexistencia de la obligación de recibir los aportes a la seguridad social hasta tanto se acredite judicialmente la existencia de una relación laboral con los

extremos temporales exactos y se cancelen los respectivos intereses moratorios o el cálculo actuarial a favor de la demandada”; “Inexistencia de responsabilidad de Colpensiones frente al no pago de los aportes a la Seguridad Social”; “Falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad”; “Buena fe”; “Prescripción”; “Imposibilidad de condena en costas a Colpensiones” y “Excepción genérica”

La sociedad **Inversiones en Salud S.A.S.** se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues la actora era una profesional independiente y por tanto no había lugar al reconocimiento de emolumentos de orden laboral como prestaciones sociales y vacaciones, además que, corría a su cargo la afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social. Frente a los hechos, manifiesta que los contratos por prestación de servicios se celebraron en los años 2002; 2003; 2009 y 2010; que suscribieron una transacción al momento de terminar la relación civil y comercial que es plenamente válida y soluciona anticipadamente cualquier reclamación sobre el vínculo. Que el 1 de abril de 2015 acordaron un contrato de trabajo que tuvo vigencia hasta el 17 de mayo de 2017, fecha en la cual se presentó renuncia voluntaria por parte de la demandante. Como excepciones perentorias presenta las de “Inexistencia de las obligaciones reclamadas”; “Inexistencia de contrato de trabajo de subordinación laboral y de relación laboral entre las partes”; “Existencia de contrato comercial”; “Buena fe”; “Prescripción” y “Transacción”.

Por su parte, la **EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.**, en la contestación a la demanda manifiesta oponerse a cualquier declaración de solidaridad, toda vez que no se reúnen los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la actividad que ejerce tiene una naturaleza diferente a la ejecutada por el empleador y, por disposición legal la labor del empleador no puede ser ejecutada por ésta sino por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), además que no tuvo conocimiento ni participó del acuerdo de voluntades suscrito entre la demandante y la sociedad codemandada. Respecto de los hechos, manifiesta que no le constan toda vez que no fue parte de la relación laboral descrita pues no contrató a la demandante, ni la subordinó de manera continuada, además, la labor ejercida por la actora no puede ser directamente realizada por la EPS, sino que debe estar coordinada por otro tipo de entidades que prestan el servicio. Formula las excepciones de “Ausencia de vínculo laboral entre EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. y la demandante”; “Ausencia de solidaridad legal entre EPS y Medicina Prepagada S.A. y las codemandadas”;

“Improcedencia del reintegro y de cualquier otra declaración o condena respecto de EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. exclusiva del empleador”; “Improcedencia de sanciones en contra de EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.”; “Buena fe”; “Improcedencia de declaraciones y condenas Ultra y/o Extra *petita*” y “Prescripción”.

En esta misma oportunidad llamó en garantía a la codemandada Inversiones en Salud S.A.S., bajo el supuesto que el contrato de prestación de servicios celebrado entre la E.P.S. y la sociedad, era la IPS la encargada de la prestación de servicios además que, conforme el artículo 1597 del Código Civil, el deudor queda subrogado en la acción del acreedor, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores y a la parte que tenga en la deuda. Solicita entonces, se declare que Inversiones en Salud S.A.S. está obligada a reembolsarle las sumas de dinero que tuviere que pagar como consecuencia de una sentencia condenatoria.

El llamamiento en garantía fue admitido por el despacho de conocimiento, en auto del 22 de febrero de 2018 y se dio por no contestado en providencia del 26 de julio de la misma anualidad.

En sentencia del 14 de marzo de 2019, el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí** declaró la existencia de una relación laboral entre Nora Elena Ángel Mesa e Inversiones en Salud S.A.S. que tuvo lugar entre el 1º de mayo de 1999 y el 31 de mayo de 2017; por lo que condenó al pago de los conceptos de cesantía, intereses a las cesantías doblados, prima de servicios, vacaciones y sanción moratoria por no consignar las cesantías en un fondo oportunamente. También condenó al reconocimiento de sanción moratoria a razón de \$141.066 diarios por 24 meses, término luego del cual se seguirían reconociendo los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera. Condenó a Inversiones en Salud S.A.S. a realizar la afiliación retroactiva de la actora y a realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social a Colpensiones, conforme los salarios probados en el plenario. Declaró que SURA EPS es responsablemente solidaria por las condenas relativas al pago de prestaciones sociales, la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Sanción por falta de pago del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas a las codemandadas.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de **Inversiones en Salud S.A.S.** formuló recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, en razón a que la demandante, plenamente capaz y en ejercicio de su profesión liberal de médico, celebró un contrato de naturaleza civil para que la empresa coordinara y suministrara servicios, con los implementos necesarios para la gestión. Este contrato se celebró en más de una ocasión, es decir, fue reiterado por las partes a lo largo de los años, y los parámetros de contratación se cumplieron en la práctica. Al momento de suscribirse los contratos de prestación de servicios, no se presentaron vicios del consentimiento ni objeto ni causa ilícitos, ni es posible indicar que no tuviera capacidad de comprensión de los documentos que suscribía, dada la profesión de la demandante y madurez en edad. La demandante ejercía liberalmente su profesión ya que, debía declarar cuál era su disponibilidad temporal y de acuerdo a ello se establecían los horarios de los pacientes a atender, también, era posible ausentarse de su lugar de trabajo, con la debida coordinación con la sociedad Inversiones de Salud. Durante la vigencia de este contrato de coordinación para la prestación de servicios profesionales, la demandante nunca manifestó inquietudes o reclamaciones sobre el tipo de contrato, cumplía con el pago de las pólizas para la protección de cualquier responsabilidad ante terceros, presentaba sus impuestos a la Dian como trabajadora independiente y estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones como profesional independiente, por lo que en Colpensiones tiene las semanas cotizadas acorde con el cumplimiento de esta obligación y el ejercicio profesional independiente de la medicina. Los contratos no fueron pactados para desconocer derechos laborales, sino para satisfacer los intereses de cada una de las partes, y si bien en los últimos años de relación se cambió la modalidad de contrato, por uno de carácter laboral, se trató de una medida de recalificación y no de una forma de menguar los derechos de la demandante, además, téngase en cuenta que al momento de la transición las partes hicieron un acta de terminación de mutuo acuerdo que contiene un contrato de transacción, que no pueden ignorarse sus efectos pues se estaba hablando de derechos discutibles o inciertos para la época, así entonces, se debió reconocer la eficacia del contrato de transacción y por tanto, se debió declarar que cualquier conflicto quedó resuelto allí entre las partes, por lo que, no habría lugar a condenar por conceptos de prestaciones sociales, indemnizaciones ni cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Además, la parte demandada entendió estar actuando de buena fe durante todo el tiempo de

vinculación. Así las cosas, solicita sea revocada la sentencia en su totalidad y se absuelva a su representada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

Por su parte, el apoderado de **EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.**, manifestó que su representada se encarga de la afiliación, recaudo de cotizaciones y administración de beneficios y costos de acuerdo a las tarifas de servicio de salud; no es una prestadora del servicio de salud, por lo que la declaración de solidaridad se cae por su peso, pues la Ley impone una prohibición legal de contratar más del 30% del gasto en salud directamente o por intermedio suyo, por eso debe acudir con la contratación de IPS para formar una red de prestación de servicios, y ellos actúan bajo autonomía técnica, financiera y administrativa y, prestan directamente el servicio. Así entonces, no se cumplen los presupuestos de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la labor es por naturaleza extraña a la ejecutada por la sociedad que se tiene como empleadora. En caso que se confirme la solidaridad, solicita se circunscriba a los salarios, prestaciones, y a las indemnizaciones de conformidad con el mismo artículo, por lo que la responsabilidad solidaria no debe extenderse a las sanciones como las del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Indica que la EPS no tuvo conocimiento ni participación en la vinculación de la demandante, ni fue su empleadora, de modo que no sería imputable ninguna consecuencia derivada de la ineficacia de la terminación de la relación. Sobre el llamamiento en garantía, manifiesta que el contrato o la oferta mercantil es el fundamento jurídico que satisface tal llamamiento y no sólo este contrato sino además por ministerio de la Ley por que el artículo 1527 o 1096 del Código Civil se establece la subrogación entre los deudores solidarios, por lo que debe ser la sociedad codemandada la llamada a responder por todas las obligaciones relativas a la relación laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Puesto en traslado el término para presentar alegaciones, las partes allegaron sus consideraciones sobre el caso, en los siguientes términos:

El apoderado de **EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.**, resalta que su representada nunca tuvo relación con la demandante, no fue su empleadora ni tampoco recae sobre ella la responsabilidad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, porque

sólo la sociedad tiene una naturaleza extraña a la ejecutada por el verdadero empleador, pues está encargada de la afiliación de los usuarios, recaudo de cotizaciones y administración de beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en la Salud, pero la EPS no puede ejercer la labor de la sociedad empleadora, no puede prestar servicios. Indica que la codemandada actuó con plena autonomía técnica y administrativa, y no existe ninguna participación de la EPS en sus programas lo que incluye la contratación de la demandante. Reitera que, la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no se extiende a las sanciones. Sobre el llamamiento en garantía a la codemandada, manifiesta que la cláusula octava del contrato establece que la IPS Inversiones en Salud S.A.S. deberá indemnizar a Sura por los perjuicios patrimoniales o extra patrimoniales que se causen por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, además que el mismo contrato define que la IPS prestará sus servicios de manera autónoma e independiente y en caso que se vea obligada al pago de cualquier acreencia laboral o civil, exigirá el pago a la IPS, pudiéndolo deducir de los conceptos que le adeuda. Solicita entonces se revoquen los puntos en los que se ordenó la solidaridad de su representada o en subsidio, se declare que Inversiones en Salud S.A.S. está obligada a reembolsar las sumas de dinero que tuviere que pagar como consecuencia de una sentencia condenatoria, y se tenga como probada la excepción de prescripción frente a todos los emolumentos.

Por su parte, El apoderado de la demandante presenta escrito en el que expone que, si bien esu representada es versada en el conocimiento de la medicina, no es así respecto al derecho y que la demandada obró de mala fe pues evadió las obligaciones laborales mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios, teniendo conocimiento que efectivamente se estaba desarrollando una relación laboral con las características propias de ésta, pues laboraba personalmente en las instalaciones de la demandada, con elementos de trabajo proveídos por ésta, en un horario de trabajo definido, usando uniforme y logo de las accionadas y bajo su continua subordinación. Así entonces solicita la confirmación de la sentencia de primera instancia.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, manifiesta en sus alegatos que carece de legitimación en la causa por pasiva en lo que tiene que ver con el asunto del proceso, pues siendo una administradora del Sistema General de Pensiones no tiene ningún tipo de competencia o injerencia en las relaciones laborales de sus afiliados, y no puede hacer ningún

pronunciamiento sobre los presupuestos fácticos del caso. Menciona que el empleador omiso que no afilia a sus trabajadores o realiza el pago de forma incorrecta o deficitaria debe asumir la responsabilidad de ello, previo cálculo actuarial proferido por Colpensiones, por tanto, es el trabajador a quien le compete demostrar la existencia de una prestación personal del servicio, caso en el cual, Colpensiones sólo deberá recibir los aportes por el tiempo debidamente comprobado en el proceso.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia se ha definido por los puntos de apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, así entonces, se delimita en establecer si la relación sostenida por Nora Elena Ángel Mesa e Inversiones en Salud S.A.S. tenía una naturaleza civil, nacida del acuerdo de voluntades o si, por el contrario, se trató desde el principio de una relación laboral encubierta. Se deberá verificar también, si el acta de terminación por mutuo acuerdo celebrado entre las partes tiene plena validez como transacción y si en consecuencia debe revocarse la condena por los conceptos laborales determinados antes de ésta. Seguidamente, se verificará si la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., es o no solidaria de las condenas proferidas en instancia y en caso positivo, sobre qué conceptos recaería ésta. Se determinará igualmente, si la sociedad Inversiones en Salud S.A.S. debe responder como llamada en garantía por cualquier condena que se imponga a la EPS llamada a juicio.

CONSIDERACIONES

Para abordar el tema en comento, es primero importante precisar, que el contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otro empleador, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes, consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, en el Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

Igualmente, en el artículo 24 ibídem expone:

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

Teniendo claros los alcances de la normatividad aplicable, y del contrato de trabajo, resalta el principio de primacía de la realidad sobre las formas, previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, consistente en la naturaleza laboral de toda relación jurídica sustancial, cuando se presenten sus tres elementos esenciales, al margen del nombre o modalidad contractual utilizada por las partes.

La Recomendación 198 de la OIT, incentiva a los miembros parte, facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo mediante la admisión de diversos medios probatorios para su individualización, la consagración de presunciones legales cuando se presenta uno o varios indicios y la consulta con organizaciones representativas para establecer las características esenciales del vínculo de trabajo. Dentro de estas observaciones, la Organización otorga, a modo de sugerencia y no como una lista taxativa, algunos indicios que pueden ser determinantes para establecer la existencia de una relación laboral, la cita en extenso refiere:

13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:

- (a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y
- (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador.

Bajo los anteriores presupuestos, es claro que el elemento esencial para la determinación de la existencia de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio, y que tanto la Constitución en un sentido amplio, como la Ley, protegen al trabajador que se encuentra inmerso en una relación de trabajo no reconocida por el empleador, procurando el reconocimiento de sus derechos por encima de cualquier forma jurídica por la que se haya definido el vínculo.

Por otra parte, y de conformidad con las particularidades del caso, se hace necesario hacer una mención de la celebración de un **contrato de transacción** como una de las formas de terminación extrajudicial de los conflictos surgidos en torno a los derechos laborales y a su vez constituye una causa legal de terminación del contrato conforme numeral 1º literal b del artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo.

El artículo 2469 del Código Civil define la transacción como un *contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual*. En este contrato es necesario que se realicen concesiones mutuas, pues no se considera como tal, la mera renuncia de un derecho no disputado y, como en cualquier otro contrato, es necesario que confluyan los

elementos dispuestos en el artículo 1502 del Código Civil, a saber, la capacidad, el consentimiento exento de vicios, y objeto y causa lícita. La ausencia de cualquiera de estos elementos, configura la nulidad del contrato. En materia laboral, el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que este acuerdo es válido, pero no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en este sentido en decisiones como la SL2503 de 2017, providencia en la cual se dispuso que la existencia de la conciliación en materia laboral está condicionada a que *i) Verse sobre derechos inciertos y discutibles, ii) Las partes celebrantes del contrato transaccional tengan capacidad de ejercicio, iii) El consentimiento de las partes no adolezca de vicios, y iv) Recaiga sobre un objeto lícito y causa lícita...*

Sobre el carácter cierto e indiscutible de un derecho laboral, la Corte ha manifestado que esta se funda en la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación, y no basta que el empleador desconozca la existencia de un derecho para que se tenga como discutible, para que pueda ser objeto de conciliación o transacción, pues esto constituye un uso inadecuado del derecho que conlleva la anulación del pacto. De la misma forma, la conciliación o transacción es inválida cuando no se expresa de manera clara e individualizada las acreencias laborales que se incluyen en el acuerdo, pues la generalización puede inducir a error al trabajador y eventualmente, vulnerar derechos irrenunciables de los arts.13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo. Al respecto véanse las sentencias SL 1639-2022; SL 1413-2022; SL 4066-2021; SL 3071-2020; entre otras.

Por otra parte, el **artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo** refiere que los contratistas independientes, son verdaderos empleadores y responden por las acreencias laborales que se llegaren a causar con respecto a sus subordinados, sin embargo, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a las que haya lugar, excepto en los casos en que la actividad se trate de labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio. (véanse las sentencias SL 2002 de 2022; SL 4322 de 2021; SL 3774 de 2021; SL845-2021 entre otras)

La sentencia la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 1453 de 2023, recordó que:

Sobre el particular, el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece que las empresas contratantes son responsables del pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudados a los trabajadores de las empresas contratistas, «a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio». Lo anterior significa que los empleadores contratantes serán solidariamente responsables por el pago de las acreencias laborales de los empleados de los contratistas, siempre que las actividades desarrolladas por ambos sean afines, conexas o similares o, dicho de otro modo, cuando se constate que las actividades del contratista guarden relación con las actividades principales de la empresa contratante o aquellas la caracterizan, son parte del giro común o núcleo de sus negocios.

Ahora, para determinar si las actividades de los empresarios son afines, conexas e incluso complementarias, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho que «lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste», en cuyo análisis cumple un «papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador» (CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 33082, reiterada en CSJ SL, 1 mar. 2010, rad. 35864 y CSJ SL14692-2017).

De esta forma, a fin de constatar la configuración de la responsabilidad solidaria, lo relevante es que las actividades entre los empresarios sean real y materialmente afines, pues bien puede ocurrir que en los certificados de cámara de comercio sus objetos sociales sean disímiles y, sin embargo, el material probatorio denote que en los hechos el trabajador estuvo vinculado a tareas que materialmente guardan relación con las actividades principales de la empresa contratante.

Así las cosas, no es necesario que la función adelantada por el contratista constituya una impresa exacta del objeto social de la empresa contratante para que se active la solidaridad, sino que basta que se trate de actividades afines, conexas o complementarias, pues lo que se busca garantizar es la efectividad de los derechos de los trabajadores, así como la promoción de una cultura de responsabilidad a lo largo de la cadena de producción de los distintos sectores económicos.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la Juez de Primera Instancia declaró la existencia de una relación laboral entre la señora Nora Elena Ángel Mesa y la sociedad Inversiones en Salud S.A.S., y fijó los extremos temporales entre el 1 de mayo de 1999 y el 31 de mayo de 2017, declaración sobre la que recae principalmente la oposición de la sociedad demandada en el recurso de apelación formulado por su apoderado, pues se alega que no hubo relación laboral entre éstas, y la profesión como médica la ejerció de manera independiente hasta el año 2015, siendo la sociedad demandada hasta entonces, una mediadora o facilitadora de

medios logísticos y administrativos para poder llevar a cabo esta profesión y no una empleadora como concluyó la Juez A quo.

En providencia, el despacho hizo un análisis profuso de las pruebas allegadas al proceso. Entre las documentales, resaltó sendos certificados emitidos por la sociedad demandada inicialmente como Ltda., en la que se certificó el desarrollo de su actividad profesional como médica general, de manera independiente: en anexo 001 pág.102, aparece un certificado que relaciona la existencia del vínculo desde el mes de mayo a diciembre de 1999. A partir de ésta primera constancia, aparecen otras más que legitiman la existencia del vínculo para los períodos comprendidos entre 2000 y 2007 (pág.109 a 111); enero de 2000 a diciembre de 2009 (pág.108); enero de 2000 y agosto de 2010 (pág.103); febrero de 2004 a abril de 2011 (pág.104) y; enero de 2000 y agosto de 2011 (pág.105), los cuales dan cuenta de un vínculo profesional estable entre las partes.

A partir del certificado del 27 de mayo de 2015 (pág.106); la certificación da cuenta del cambio en la modalidad de vinculación, enunciando que hasta el 31 de marzo de 2015 desarrolló su actividad profesional en forma independiente, y que, a partir del 1 de abril de 2015 se vinculó a la misma entidad, mediante un contrato de trabajo a término indefinido. El contenido de lo sentado se repite para los documentos del 4 de mayo de 2016 (pág.107)

Se trae al plenario de igual forma los certificados de retención en la fuente de la señora Nora Elena Ángel Mesa, emitidos por la Sociedad Inversiones en Salud sobre los honorarios causados para los años 2006; 2007; 2008; 2009; 2010, 2013 y 2014 (Anexo 001 págs.95 a 101) y 2011 a 2014 (págs.159 a 165) los cuales dan cuenta de la continuidad en el pago de honorarios por parte de la demandada por los años certificados.

Ambas partes, aportan acuerdos denominados “contrato de administración de servicios profesionales en salud”, celebrados desde el 1 de febrero de 2002 (Anexo 001 pág.112 y Anexo 004 pág.157); 1 de febrero de 2003 (pág.154) 1 de agosto de 2009 (Anexo 001 pág.118 y Anexo 004 pág.150); 1 de marzo de 2010 (pág. Anexo 004 pág.146). Estos contratos son, según la sociedad de la pasiva, los que determinaron el tipo de vínculo entre las partes como una relación comercial en tanto que la demandada no actuó como empleadora, sino como administradora del servicio de consulta médica, pues estaba encargada de adecuar las

instalaciones físicas, dotación de muebles y enseres, contratación de personal de enfermería, administración, recepción y aseo, mercadeo para la generación o aumento de consultas, recaudo de dinero, entre otros.

Sin embargo, no puede dársele credibilidad al argumento esbozado por la Sociedad demandada, toda vez que, si en efecto el objeto del contrato sería la provisión y administración de medios para el ejercicio de la profesión de médico, la contraprestación directa lógica sería el pago de un canon por concepto de administración a la empresa, quien estaría obligada en todo caso a entregar al profesional, la plusvalía que genera la prestación del servicio médico pues siendo un profesional independiente, tendría derecho a percibir las ganancias que se generen y estaría obligado a asumir a nombre propio los riesgos económicos que encierra la administración de un negocio, pero éste no es el caso de la actora, pues bien se evidencia en el contrato, que no existe una contraprestación directa a la sociedad por la administración del servicio, y más bien, era Inversiones en Salud quien obtenía los réditos del oficio y la que finalmente determinaba el valor de los honorarios de la médica, de acuerdo a la relación de los pacientes atendidos o número de consultas realizadas, y del valor unitario para cada uno de ellos, que para el caso del acuerdo del 1 de marzo de 2010 era de \$395 por usuario asignado (Anexo 004 pág.146), más parecido a una contraprestación directa por la prestación personal del servicio que a una relación comercial.

Debe tenerse en cuenta lo sugerido por la Recomendación 198 de la OIT en el caso concreto, pues bien relacionó, dentro de la lista de posibles indicios de la existencia de una relación de trabajo las de *“que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona”* es decir, que los rendimientos de su labor no sean percibidos directamente por el presunto trabajador y *“el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador”* es decir, que en caso de presentarse pérdidas, no sería el trabajador el llamado a responder financieramente por ellas; indicios que aparecen claramente determinados en el caso concreto, pues la trabajadora estuvo sometida únicamente a devengar lo efectivamente realizado en ejercicio de su labor, que según lo manifestado por ella misma en el interrogatorio de parte, era su única fuente de ingresos.

En lo que atiene a la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual toda prestación personal del servicio está regida por un contrato de trabajo, no hay duda que en el presente caso fue activada, pues contrario a lo consignado en el contrato de

administración de servicios profesionales en salud, la actora debía cumplir de manera especialísima con las consultas a su cargo, pues manifestó en el interrogatorio de parte que la prestación del servicio era “personal e indelegable” (minuto 30:23) y en caso de presentarse un asunto de fuerza mayor debía acudir al coordinador para que autorizara el reemplazo por con otro médico de la planta, ocurriendo en alguna oportunidad, que ante la indisponibilidad de sus compañeros, debió cumplir con la prestación de servicio estando bajo incapacidad temporal, y esta manifestación, aunque en sí no corresponde a una prueba de confesión, sí tiene peso probatorio en lo que atiene a la comprobación de los supuestos fácticos del caso, pues son contestes con lo manifestado por el testigo Juan Carlos Villareal Pertuz quien manifestó que el horario lo asignaba unilateralmente una coordinación y recibían llamados de atención por la falta al cumplimiento del mismo, les asignaban un término de 20 minutos para la atención presencial del paciente y 10 minutos para atención telefónica, que no les realizaban descuentos por conceptos de uso de los elementos de trabajo e instalaciones, y que si bien eran libres en el ejercicio de su profesión debían ceñirse a unas políticas impuestas por la sociedad y por EPS Sura y, para ausentarse y solicitar que otro médico asumiera la agenda programada debían solicitar permiso a coordinación médica, y en todo caso el reemplazo de turnos debía hacerse con un médico de la misma institución. Por su parte María Lucelly García Alzate, manifestó ante el despacho que la demandante tenía horarios definidos, que eran asignados por el call center de la entidad, que tenía jefes que impartían instrucciones sobre el desarrollo del trabajo, que no tenía autonomía para delegar un reemplazo y, no pagaba servicios públicos ni otros conceptos similares.

El señor Cristian Gallo Giraldo, testigo de Inversiones en Salud S.A.S., no desmintió lo dicho por los testigos de la parte demandante pues desconocía la mayor parte de los hechos constitutivos de la demanda, confirmó que era la sociedad que proveía las instalaciones y elementos para desempeñarse como médicos y que los pagos eran a títulos de honorarios. Ángela María Tamayo Molina manifestó que para los reemplazos generalmente se usaban médicos de la misma institución y que en efecto podía hacer uso de médicos externos siempre y cuando conocieran los lineamientos de la institución, sin embargo, al momento de preguntársele si la demandante había hecho uso de esta opción, manifestó que no tenía conocimiento, lo cual deja en duda la efectividad del dicho, pues dice que era posible, pero nunca vio que en efecto sucediera.

Así entonces, no encuentra asidero las manifestaciones presentadas por el apoderado de Inversiones en Salud S.A.S. en su recurso de apelación, pues las pruebas fueron contundentes en demostrar, que en el período comprendido entre mayo de 1999 y el 31 de marzo de 2015, Nora Elena Ángel Mesa prestó personalmente el servicio de médica, a favor de la sociedad demandada, y que era esta sociedad la dueña de los elementos de trabajo y las instalaciones del lugar, recibía las ganancias de la prestación del servicio y asumía los riesgos de la labor, y nunca se trasladó esta responsabilidad a la actora.

Ahora bien, el apoderado de la sociedad demandada también recalcó la existencia de un acta de terminación de mutuo acuerdo que contiene un contrato de transacción, respecto del cual solicita se le otorgue plena validez, pues para entonces se trataba de derechos discutibles e inciertos y, por tanto, el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada.

Conforme lo expuesto en las consideraciones precedentes, no basta con que el empleador desconozca la existencia de una relación laboral para que se tengan los derechos como inciertos y discutibles, pues lo que determina esta calificación son las condiciones en las que se desarrolló la relación, bien dice la jurisprudencia, que si se prestan los elementos propios para la existencia de una relación laboral, los derechos que surjan de ella necesariamente tendrán el carácter de ciertos e indiscutibles, y en el caso concreto, se probó de manera suficiente la prestación personal del servicio y por tanto la existencia del contrato de trabajo, lo que genera la protección de las prerrogativas del trabajo a favor de la demandante. Además, el acuerdo de terminación por mutuo acuerdo obrante en anexo 001 pág.84 y anexo 004 pág.132, no cumple con los parámetros mínimos para darle el status de contrato de transacción, toda vez que no existen contraprestaciones mutuas entre las partes, y no se determina de manera discriminada y cierta los conceptos sobre los cuales recaería el acuerdo, consignando de manera genérica que *“EL CONTRATISTA se declara a paz y salvo por todo concepto con HUMANITAS, renunciando a cualquier tipo de reclamación o acción judicial o extrajudicial en contra de ella por cualquier situación, evento, acto o hecho acaecido por la suscripción y ejecución del contrato de prestación de servicios”*. Así entonces, no puede decirse que el documento referido puede tomarse como un acuerdo válido sobre los derechos laborales surtidos durante el tiempo en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios, ni mucho menos, que se trata de un documento con efectos de cosa juzgada. Conforme a lo anterior, no hay lugar a modificar por estas razones la providencia emanada por la Juez de primera instancia.

Tampoco puede defenderse la posición que la codemandada actuó de buena fe por tener el convencimiento de estar actuando conforme a la Ley y bajo los principios del derecho civil, toda vez que sólo era el texto del contrato el que se atenía a éstas disposiciones legales y no las condiciones reales de la prestación del servicio, ya que se ejercía la labor de manera personalísima, bajo la supervisión de superiores técnicos, y se recibían honorarios que representaban una remuneración directa del servicio, la sola discordancia entre lo pactado contractualmente y las condiciones reales de la prestación no dan visos para defender una posición de buena fe por parte de Inversiones en Salud S.A.S.

Pasa entonces la Sala a resolver los puntos objeto de inconformidad formulados por EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., relativos a la condena de responsabilidad solidaria por los conceptos reconocidos en sentencia. Manifiesta la codemandada que no puede hablarse de la solidaridad de que trata el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que la EPS se encarga de la afiliación, recaudo de cotizaciones, administración de beneficios y costos de acuerdo a las tarifas de servicio de salud, más no es una prestadora del servicio de salud, por lo que la labor que desempeñaba la actora es por naturaleza extraña a la ejecutada por codemandada.

Frente a esto, la Sala – por mayoría- se acoge a la posición esgrimida desde la Corte Suprema de Justicia, según la cual, no es necesaria la correspondencia exacta de los objetos sociales de la empresa contratista y la empresa contratante para determinar la existencia de la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, basta que exista una afinidad o conexión entre éstos y que la actividad desarrollada por el trabajador haga parte del núcleo de sus negocios. En el caso concreto, los mismos argumentos con los que se fundamenta el recurso de apelación son el sustento de la confirmación de la existencia de solidaridad entre las codemandadas, toda vez que bien expuso la EPS, que se encarga de la afiliación, recaudo de cotizaciones y administración de beneficios y costos de acuerdo a las tarifas de servicio de salud conforme artículo 177 de la Ley 100 de 1993 y que tiene limitada la prestación directa de éste y por tanto debe contratar con terceros para garantizar el desarrollo de su objeto social, siendo uno de estos terceros Inversiones en Salud S.A.S., así entonces, la labor no es extraña a la naturaleza de la contratista y por el contrario, es necesaria e incluso forzosa para el desarrollo de su objeto social.

Véase que en el interrogatorio de parte la demandante manifestó “*la IPS era adscrita a SURA, o sea nosotros veíamos pacientes exclusivamente de SURA*” (Carpeta Medios Anexo Trámite minuto 28:43), también que no veía pacientes particulares pues sólo se atendían los usuarios de la empresa contratante; declaración que es conteste con la perspectiva del testigo Juan Carlos Villareal Perluz, quien hizo saber al despacho que la EPS Sura suministraba unas guías médicas para la prestación del servicio, a través de la empleadora, que debían seguir en su lugar de trabajo y que debía asistir a capacitaciones organizadas por la empresa contratante (Carpeta Medios Anexo Trámite minuto 54:47 y minuto 1:12:24) la testigo María Lucelly García Alzate mencionó que los médicos debían asistir a las capacitaciones organizadas por Sura, lo sabe porque también preparaban formaciones para las enfermeras (Carpeta Medios Anexo Trámite minuto 1:39:50)

En la recepción del testimonio de Sonia Ester Bedoya Muñoz, testigo de la parte demandada, mencionó que Inversiones en Salud S.A.S. es una de las prestadoras del servicio de la EPS SURA y que, aunque la sociedad tiene autonomía para ejercer la función para la que fue contratada, habitualmente le hacen seguimiento por medio de un proceso de auditoría para evaluar la calidad e idoneidad de la prestación del servicio (Carpeta Medios Anexo Trámite minuto 35:18)

Las pruebas testimoniales presentadas en el presente proceso, coinciden en determinar que la EPS Sura establecía los parámetros para la prestación del servicio de salud, mediante las auditorías constantes de calidad e idoneidad, las capacitaciones sobre las políticas de la empresa y el direccionamiento de los procedimientos de consulta con los usuarios de la EPS SURA mediante la publicación de guías médicas, lo cual es prueba de la participación de la sociedad contratista en las actividades propias de la empresa contratante, la práctica de pruebas da cuenta que parte de las funciones de administración de los recursos que tiene la EPS para la prestación del servicio, se desarrollaban mediante el control de las políticas de uso y prácticas generales de los médicos en la atención a los usuarios. Así las cosas, no hay lugar a decir que el objeto social de EPS Sura es independiente del desarrollado por Inversiones en Salud S.A.S., sino que, por el contrario, son actividades conexas e interdependientes, que necesariamente desarrollan la solidaridad entre ellas de conformidad con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora bien, frente al alegato que presentado por la EPS según la cual, que la responsabilidad solidaria no se extiende a las sanciones del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues éstas solo se circunscriben a los salarios, prestaciones, y a las indemnizaciones de conformidad con el mismo artículo 34 ibídem, debe indicarse que el mismo no tiene prosperidad, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, de antaño, ha manifestado que la solidaridad no hace extensiva la obligación del empleador, sino que hace garante del pago de las condenas a la empresa que se benefició del servicio. Para el efecto, se cita la sentencia de Radicación 35938 del 17 de agosto de 2011 con M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas que, si bien se refiere a un caso de culpa patronal, bien puede servir para ilustrar la posición de la Sala frente al punto de apelación de la codemandada. La cita en extenso, es la siguiente:

*“Ha enseñado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia que la culpa es diferente del principio de solidaridad, habida cuenta que mientras aquella se origina en un error de conducta del empleador, que forma parte de la causa de la obligación, que puede llegar a comprometer la responsabilidad de otros; la solidaridad que emana de la ley, viene a ser parte del efecto de la responsabilidad, trayendo al responsable solidario **como un garante** de las obligaciones que emanan del empleador.*

Entonces, dentro de la figura jurídica del contratista independiente, para efectos de condenar al reconocimiento y pago de la indemnización estatuida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se requiere la acreditación de la culpa de quien es el verdadero empleador, es decir, el contratista independiente, toda vez que la obligación de reparar los perjuicios es exclusiva del dador del laborío. Sin embargo, de conformidad a la ley laboral (artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) el dueño o beneficiario de la obra conexas con su actividad principal, funge como garante en el pago de dicha indemnización, no porque se le haga extensiva la culpa sino precisamente por virtud de la solidaridad, lo que, a su vez, como lo ha asentado esta Sala, le permite, después de cancelar la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil, lo que reafirma aún más su simple condición de garante. Pero sin ir tan lejos, nótese que el mismo artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que el beneficiario “repita contra él [empleador] lo pagado a esos trabajadores”.

Sobre el particular, es necesario traer a colación la sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, en que esta Sala, al analizar un caso similar, alrededor de la solidaridad del beneficiario de la obra en tratándose de las indemnizaciones y prestaciones debidas por los perjuicios materiales y morales causados por la muerte de un trabajador, con ocasión del accidente de trabajo por culpa patronal, así razonó:

“la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o

beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:

“Más el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al Municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.

De esta manera lo ha dicho esta Corporación:

“La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada” (Sent., 23 de septiembre 1960, “G.J.”, XCIII, 915).

En consecuencia, se ratifica la inmemorial jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de que a la luz de lo estatuido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el beneficiario del trabajo o dueño de la obra conexa con su actividad principal es solidariamente responsable en el pago de la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 de la misma obra.”

Así las cosas, el beneficiario de la obra actúa como garante del pago de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás emolumentos de orden laboral, no porque se le haga extensiva la responsabilidad sino porque, la declaración de solidaridad, le permite posteriormente al pago de la obligación, subrogarse en contra el contratista, y cobrar las

acreencias conforme lo dispuesto en el artículo 1579 del Código Civil. Así entonces, no se le dará prosperidad al punto de apelación dispuesto por la parte demandada.

Como bien la Ley le permite subrogarse en la obligación y eventualmente cobrar los conceptos que sean cancelados en virtud de una condena, encuentra el despacho que el pago de las obligaciones a favor del demandante y el posterior recobro a la codemandada, no está limitada a la existencia o no de un llamamiento en garantía, sino al ministerio de la Ley como bien lo dejó en claro la Juez A quo, por lo que se mantendrá en el mismo sentido la decisión de primera instancia.

En consecuencia, se CONFIRMARÁ la declaración de existencia de un contrato de trabajo entre Nora Elena Ángel Mesa e Inversiones en Salud S.A.S., así como las consecuencias derivadas de esta declaración, sin que haya lugar a entrar al estudio detallado de los conceptos objeto de condena que incluyen las prestaciones sociales, vacaciones, sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no ser parte de los motivos de inconformidad expuestos en el recurso.

Costas en esta instancia a cargo de Inversiones en Salud S.A.S. y EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. ante la improperada del recurso, en la suma total de un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000).

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí.

SEGUNDO: Condenar en costas en esta instancia a cargo de las recurrentes y a favor de la demandante en la suma total de un millón ciento sesenta mil pesos (\$1.160.000).

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fe44e069a7b521007104f2befd121fdc61701c11d3b3793a547c6efadbef545f**

Documento generado en 12/12/2023 02:51:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>